

OPINIÓN

Publicado el 26 de mayo 2025 en Prensa Libre

Por: Mario A. García Lara

Cuando el crimen captura el futuro

El crimen organizado corroe la economía, captura al Estado y debilita la democracia.

El crimen organizado no es ya solo un problema de seguridad, sino que se ha convertido en una amenaza sistémica para el desarrollo económico, la institucionalidad democrática y la convivencia social en Guatemala. Las evidencias son alarmantes. Las organizaciones criminales han extendido su control territorial en regiones sin presencia estatal efectiva, han penetrado redes de financiamiento electoral y han tejido nexos con estructuras políticas que les garantizan impunidad. Tal y como lo vienen advirtiendo diversos analistas y entidades especializadas en la materia, Guatemala corre el riesgo de seguir el camino de otros países latinoamericanos donde las redes criminales se consolidan al amparo de un Estado debilitado, una sociedad fragmentada y una economía capturada. Esta no es una amenaza abstracta: ya estamos viendo abundantes casos de políticos bajo investigación por vínculos con narcotráfico, regiones enteras del país bajo dominio criminal, y un sistema judicial que ha perdido capacidad de respuesta.

La urgencia de actuar es enorme, como lo evidencia un reciente estudio del Banco Mundial (“Crimen organizado y violencia en América Latina y el Caribe”), en el que se estima que el crimen y la violencia pueden costarle a un país hasta 8% de su PIB. La inversión se retrae, los negocios se encarecen por extorsiones y sobornos, y los costos de seguridad privada desplazan recursos productivos. Además, el crimen debilita la legitimidad de las instituciones: socava la confianza en la justicia, favorece la justicia por mano propia y erosiona el Estado de derecho. Pero el impacto más corrosivo del crimen organizado es político: infiltra partidos, financia campañas, captura gobiernos locales y distorsiona las prioridades del Estado. La debilidad institucional —reflejada en una justicia ineficiente, una policía desbordada y un sistema político disfuncional— facilita esa captura. Por eso, la lucha contra el crimen no puede limitarse al ámbito policial: requiere una estrategia nacional de reconstrucción institucional.

¿Qué hacer? Los expertos sugieren, primero, reformar profundamente el sistema de justicia: mejorar la investigación criminal, garantizar independencia judicial y modernizar la gestión de los casos. Segundo, profesionalizar y depurar las fuerzas de seguridad, apostando por modelos de policía comunitaria y prevención basada en evidencia. Tercero, impulsar políticas activas de empleo e inversión en territorios capturados por el crimen, para recuperar el control del Estado. Sin embargo, para un país como Guatemala la estrategia clave está en el ámbito político: sin reformas al sistema de partidos y al financiamiento electoral, la puerta seguirá abierta para que las mafias sigan capturando el poder.



Guatemala necesita unas reglas electorales que garanticen más participación y representatividad ciudadana, una fiscalización efectiva y un tribunal electoral independiente y competente.

Combatir al crimen organizado es una prioridad de desarrollo, no solo de seguridad. No podemos seguir actuando “como si todo estuviera normal”. Las mafias no solo trafican drogas o personas: trafican influencias, cooptan instituciones y paralizan la acción del Estado. La historia muestra que la impunidad no se vence con discursos, sino con acción coordinada. El crimen organizado no será derrotado solo por fiscales y policías: será derrotado cuando la ciudadanía y sus líderes (academia, empresarios, partidos y medios) exija y construya instituciones que funcionen. Esta batalla crucial por el futuro de Guatemala debe empezar ahora.